



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)

MEDIO DE CONTROL: Controversias Contractuales
DEMANDANTE: Fabián Avellaneda Medrano
DEMANDADO: Departamento de Boyacá
RADICACIÓN: 1500133330042018-00097-00

1. ANTECEDENTES

Mediante apoderado judicial el Señor FABIÁN AVELLANEDA MEDRANO haciendo uso del medio de control de controversias contractuales instauró demanda en contra del Departamento de Boyacá.

2. NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL.

Se solicita en la demanda que se declare: 1º *“la existencia del contrato de prestación de servicios N° 000849 del 20 de febrero de 2017, suscrito entre el señor Fabián Avellaneda Medrano y la Gobernación de Boyacá”*; 2º el incumplimiento de obligaciones dentro de ese contrato por parte del Departamento de Boyacá y 3º *“que en forma tácita el Departamento de Boyacá dio por terminado el Contrato No. 000849 del 20 de febrero de 2017, sin seguir el Trámite Administrativo necesario para corroborar la existencia de una causal para ello vulnerando el derecho al debido proceso del señor Fabián Avellaneda Medrano”*. Y que como consecuencia de lo anterior se condene al Departamento de Boyacá pagar las sumas de dinero referidas por la demandante por concepto de perjuicios materiales con sus respectivos intereses y se ordene a la demandada realizar liquidación del contrato de prestación de servicios en comento.

2. PRESUPUESTOS DE LA ACCION

2.1 Jurisdicción y Competencia

a) En razón de las partes y por la materia del debate (art.104 numeral 2 y parágrafo C.P.A.C.A.): Este despacho es competente para conocer del presente medio de control al tenor de la citada norma, que indica:

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

(...)

2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado.

(...)

Parágrafo. Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%.

En este caso se promueve una discusión relativa al incumplimiento del contrato de prestación de servicios N° 000849 del 20 de febrero de 2017 celebrado entre la demandante y el Departamento de Boyacá, siendo esta Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa para conocer de este debate.

b) Por razón del territorio (art. 156-4 CPACA): Conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del CPACA *"Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas: (...) 4. En los contractuales y en los ejecutivos originados en contratos estatales se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato. Si este comprendiere varios departamentos será tribunal competente a prevención el que elija el demandante (...)"* (Subrayado fuera de texto)

A pesar de que en el contrato no se estipuló de manera expresa el lugar en el que el contratista habría de prestar sus servicios, se tiene que el accionante manifiesta que estos se prestarían principalmente en la ciudad de Tunja (fl. 10vto), que el contrato se suscribió en esta misma ciudad y en su cláusula "VIGÉSIMO NOVENA", estableció a Tunja como "Domicilio contractual" (fls. 47-48), permitiendo concluir que fue el Municipio de Tunja el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato, lo cual permite al despacho constatar que es competente, por el factor territorial, para conocer del presente asunto.

c) Competencia funcional por razón de la cuantía (art. 155-5): El artículo 155 del CPACA dispone que los jueces administrativos conocen en primera instancia de los asuntos relativos a contratos, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así mismo, el artículo 157 señala que *"(...) Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen (...) Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor (...)"*.

En este caso la pretensión de mayor valor, asciende a \$13.260.000, consistente en lo que el demandante considera valor dejado de percibir por el demandante correspondiente lo que faltó por ejecutar del contrato que considera incumplido y terminado de facto por parte del demandado.

Así las cosas, como quiera que el límite de la cuantía por la cual conocen los jueces administrativos es de 500 S.M.M.L.V. (\$390.621.000,00), este juzgado es el competente para conocer de la presente demanda.

2.2 La caducidad del medio de control de controversias contractuales

El literal j del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, reza:

"j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (02) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirva de fundamento.

Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente.

En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:

i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;

ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación del contrato por cualquier causa;

iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta;

iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe;

v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la

terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga;

En el caso bajo estudio, estamos ante un contrato suscrito el 20 de febrero de 2017 (47-48) con acta de inicio de esa misma fecha proyectado en su terminación hasta el 19 de octubre de 2017 (fl. 55) por lo que a la fecha de radicación no habrían transcurrido los 2 años previstos por ley para la caducidad de la acción, como quiera que esta se presentó el 4 de mayo de 2018.

2.3. Procedibilidad del medio de control

El medio de control de controversias contractuales previsto en el artículo 141 del CPACA es procedente para el presente caso, por cuanto el demandante aduce la configuración un perjuicio consecuencia de un incumplimiento contractual.

2.4 Del contenido de la demanda y sus anexos

Con relación a lo dispuesto en los artículos 162, referente al contenido de la demanda, se evidencia inobservancia de lo dispuesto en el numeral 2 eiusdem, que exige que las pretensiones se expresen con precisión y claridad y que en caso de acumulación se atienda a lo dispuesto para dicho efecto en el CPACA, esto es, lo dispuesto en el artículo 165 que señala:

Artículo 165. Acumulación de pretensiones. En la demanda se podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que sean conexas y concurren los siguientes requisitos:

- 1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando en la demanda se afirme que el daño ha sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de un particular, podrán acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción Contencioso Administrativa será competente para su conocimiento y resolución.*
- 2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.*
- 3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.*
- 4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.*

Dado que el demandante adicional a las pretensiones referidas al contrato en que se soporta la acción, plasma pretensiones elevadas a la Procuraduría, que evidentemente no serían de competencia de este despacho, incurriendo en una indebida acumulación de pretensiones, lo que implica que la demanda no cuenta con los requisitos legalmente exigidos por la ley, por lo que deberá inadmitirse para efectos de que su falencia sea subsanada de conformidad con lo establecido en el artículo 170 del CPACA.

2.5.-De la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad

Revisado el expediente encuentra el Despacho que está evacuado el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial en concordancia con el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009¹ y el 161 numeral 1º del CPACA², como quiera que al expediente se allegó constancia de conciliación prejudicial expedida por la Procuraduría 69 Judicial I para asuntos Administrativos de Tunja, la cual se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio (fls. 97-98)

2.6 Estimación razonada de la cuantía

Según el **Numeral 5 artículo 162 del CPACA**, en concordancia con el **inciso 2º del art. 157** del mismo estatuto, corresponde al demandante, so pena de inadmisión de la demanda, realizar la estimación razonada de la cuantía, lo cual tiene como objeto, delimitar los extremos objetivos de la litis y determinar el juez competente para conocer del asunto.

¹ "ARTÍCULO 13. Apruébese como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente: "Artículo 42A. Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial".

² "(...) La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos: 1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales (...)"

En el presente caso, el actor realiza la estimación de la cuantía en el valor de \$13.622.200, por el monto total de las pretensiones de lo que reclama como perjuicios por presunto incumplimiento y terminación de contrato, por parte del Departamento de Boyacá.

2.7. Otras determinaciones.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 3º del Decreto 1365 de 2013, la notificación a la **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO**, a la que hace referencia el inciso 6 del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012 de autos admisorios de demanda y de mandamientos de pago, únicamente será procedente cuando se trate de procesos donde se encuentren involucrados intereses litigiosos de la Nación, y como en el presente asunto se demanda a una entidad territorial orden municipal no se hace necesario ordenar la notificación a la **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO**.

Finalmente, a folio 1 del expediente obra poder especial conferido por **FABIÁN AVELLANEDA MEDRANO** en favor de la abogada **MARÍA MÓNICA PÉREZ ALVARADO** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.0574.589.022 y T.P. 257.491 del C. S de la J, para que promueva demanda tendiente a declarar incumplimiento de obligaciones pactadas dentro de Contrato de Prestación de servicios N° 849 del 20 de febrero de 2017, celebrado entre el demandante y el Departamento de Boyacá, por lo cual el despacho le reconocerá personería para actuar en el presente trámite.

Por lo anteriormente expuesto, la demanda debe inadmitirse por no reunir los requisitos legales, por lo que el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja,

RESUELVE

PRIMERO.- INADMITIR la demanda presentada por **FABIÁN AVELLANEDA MEDRANO** contra del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- CONCEDER a la parte actora el término de diez (10) días, para que proceda a subsanar reformulando las pretensiones de manera que se ajuste a lo ordenado en el numeral 2 del artículo 162 de CPACA, concordado con el artículo 165 de la misma codificación.

La parte actora deberá allegar con el escrito de subsanación, copias del mismo, al igual que la subsanación **en medio magnético**, para que sean anexados a los respectivos traslados y al expediente, siendo estos necesarios para cumplir en legal forma con la notificación a la entidad demandada.

TERCERO.- RECONOCER personería a la abogada **MARÍA MÓNICA PÉREZ ALVARADO** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.057.589.022 y T.P. 257.491 del C. S de la J, como apoderada de la parte demandante en los términos y para los efectos del poder conferido a folios 1.

Notifíquese y cúmplase.

LAURA JOHANNA CABARGAS CASTILLO
Jueza

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO DE TUNJA

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRÓNICO

N° 33 De Hoy 22 de junio de 2018
A LAS 8:00 a.m.

FÉRNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
Secretario

3.
Cesco

³ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 22 de junio de 2018 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Ferney Mauricio Díaz Hernández - Secretario